

# Boletín informativo

---

**Boletín informativo sobre América Latina N°28**

Caracas/Bogotá/Bruselas, 16 de mayo de 2013

---

## Venezuela: una casa dividida

### I. Panorama general

---

La muerte del presidente Hugo Chávez, víctima de cáncer, el 5 de marzo, precipitó la celebración de elecciones apenas 40 días después, en las que el sucesor que él mismo designó, Nicolás Maduro, ganó por un margen de menos del 1,5% contra Henrique Capriles, de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Sin embargo, el estrecho margen y la impugnación de la votación crean dudas sobre la sostenibilidad del nuevo gobierno. Un país ya profundamente polarizado aparece ahora dividido en dos mitades casi idénticas y al parecer irreconciliables. Falta todavía aclarar la validez del resultado de los comicios y restaurar la independencia plena de las autoridades electorales, judiciales y demás instituciones fundamentales. No obstante, para abordar la crisis de gobernabilidad y lograr que Venezuela haga frente a los serios problemas económicos y sociales que padece, el diálogo nacional debe prevalecer sobre la confrontación y el consenso debe primar sobre la violencia partidista.

Con unas instituciones debilitadas por la política de cooptación a la que recurrió el gobierno de Chávez, es posible que, en últimas, la MUD no tenga muchas opciones prácticas a nivel jurídico interno, con lo cual, en opinión de la oposición, no tendría más remedio que adoptar una política de manifestaciones callejeras pacíficas y otras modalidades de presión política, incluido el llamado a la opinión pública internacional. Cuando el discurso político asume la forma de la protesta callejera en gran escala, siempre existe el riesgo de violencia. Ya ha habido varios muertos y numerosos heridos, a menudo en circunstancias confusas, hecho que el gobierno parece empeñado en explotar a fin de desacreditar a la oposición.

El vacío de poder que produjo la muerte de Chávez es una fuente potencial de inestabilidad. El régimen no puede reemplazar la autoridad personal del caudillo sobre su movimiento político, las fuerzas armadas y la burocracia estatal, por lo menos en el corto plazo. Este vacío es particularmente grave porque el país está al borde de una recesión económica, sufre de un enorme déficit del sector público, padece una creciente escasez de productos básicos y tiene una de las tasas de inflación más altas del mundo.

Un régimen político altamente personalizado ha sido reemplazado por una agrupación imprevisible de grupos e incluso de intereses particulares. Tanto el régimen como la oposición están pagando el costo de haber desmantelado elementos importantes propios de la democracia y del Estado de Derecho durante los últimos catorce años. Venezuela está insuficientemente preparada para la transición después de Chávez y necesita reconstruir con urgencia su tejido social y político. Es preciso cen-

trar los esfuerzos inmediatos en impedir que la polarización extrema degenera en violencia política y en impulsar firmemente un entendimiento básico sobre la manera de coexistir sin Chávez.

Un comportamiento miope de cualquiera de las partes podría precipitar al país en una crisis económica y política de la cual sería muy difícil recuperarse. Es alentador observar que los líderes de la oposición han hecho hincapié en el uso de formas no violentas de disenso. También ha habido indicios de que algunos miembros del gobierno entienden la necesidad del diálogo y el consenso, aunque esto no se ha traducido todavía en acciones concretas. Lo ideal sería que Maduro nombrara a algunas figuras de la oposición en su gobierno, aunque para esto es necesario que quienes están en capacidad de lograrlo, de ambos lados, inicien desde ya el diálogo y promuevan el consenso.

La mayor parte de la comunidad internacional, en particular los socios regionales y vecinos, han tendido a mirar hacia otro lado cuando se trata de evaluar la democracia y la situación de derechos humanos en Venezuela. Esto tiene que cambiar. La inestabilidad podría, como mínimo, debilitar el consenso regional en torno a las normas democráticas. Las organizaciones multilaterales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), y las potencias regionales, como Brasil, necesitan dejar en claro que no van a tolerar que se sigan menoscabando el Estado de Derecho y los valores democráticos.

Con el fin de impedir el aumento imprevisible de la polarización y la violencia política:

- ❑ El gobierno y la oposición deben expresar el compromiso público de utilizar medios pacíficos para solucionar la crisis política, advirtiendo a sus partidarios que la violencia –y la retórica de confrontación que podría incitar su uso– no están permitidas, y que quienes recurran a ella serán sancionados plenamente de acuerdo a la ley.
- ❑ El gobierno debe reconocer que la marcada división del electorado requiere la construcción de un consenso antes que una agenda partidista. Debe tender puentes que conduzcan al diálogo con la oposición, el sector privado y la sociedad civil con el objeto de reducir las tensiones y encontrar un terreno común. La Iglesia católica, los socios regionales y la comunidad internacional en general deben apoyar este acercamiento y estar listos, si se les pide, a proporcionar mediación en el momento apropiado.
- ❑ Para despejar el camino hacia el diálogo, se deben aclarar las dudas respecto a las elecciones. La sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia debe abordar plenamente y con transparencia todas las denuncias de violencia, intimidación e irregularidades, de ser necesario ordenando una nueva votación en los lugares donde tales incidentes arrojen dudas razonables sobre los resultados. El gobierno debe dejar en claro que apoya esas medidas y, en caso de que se tomen, todas las partes deben reconocer de inmediato la validez de los comicios.
- ❑ El gobierno debe ofrecer garantías para el ejercicio legítimo del derecho de protesta y de libertad de expresión, absteniéndose de lanzar amenazas e instaurar procesos legales contra los medios de comunicación independientes, y de tomar represalia contra los funcionarios públicos sospechosos de ser simpatizantes de la oposición. Además, las fuerzas armadas deben actuar conforme a la Constitución, que prohíbe su participación en la política partidista.

- La comunidad internacional, en especial los vecinos como Brasil, así como la OEA y UNASUR deben alentar una solución pacífica de la crisis política y ofrecerse como facilitadores y mediadores.

Nada de esto será fácil, en gran parte porque existe una peligrosa brecha entre la insistencia del régimen de que la oposición debe primero reconocer los resultados de las elecciones como condición previa para aceptarla como una fuerza política con la cual negociar y la insistencia entendible de la oposición de que solo puede aceptar los resultados luego de una revisión plena y transparente que demuestre que ninguna de las irregularidades denunciadas alteró el resultado definitivo. A fin de evitar lo peor, los moderados (o pragmáticos) de ambos lados necesitan encontrar una vía para cerrar esa brecha.

## II. Las elecciones

---

### A. *La muerte de un presidente*

Hugo Chávez fue presidente de Venezuela durante catorce años, muchos de ellos turbulentos. Fue un carismático ex oficial del Ejército elegido por primera vez en 1998, con la promesa de poner fin a la corrupción y a la exclusión social. Hacia el final de su segundo mandato de seis años, se presentó a las siguientes elecciones presidenciales en octubre de 2012, aunque se encontraba gravemente enfermo de un cáncer diagnosticado en junio de 2011, cuya naturaleza nunca se precisó públicamente pero que le había valido tres cirugías en Cuba. Asegurando que estaba curado, se embarcó en una campaña que culminó en otra victoria, al obtener el 55,4% de los votos contra el candidato de la oposición, Henrique Capriles, un gobernador popular<sup>1</sup>. El nuevo mandato comenzó el 10 de enero de 2013 pero Chávez falleció antes de que pudiera juramentar el cargo<sup>2</sup>.

Chávez había dicho que en la eventualidad de que él no pudiera seguir ejerciendo su cargo de presidente, Venezuela debía elegir a Nicolás Maduro, el vicepresidente (y ex ministro de Relaciones Exteriores), como su sucesor. Dicho eso, el presidente viajó a Cuba a continuar el tratamiento de su enfermedad y nunca más se le vio en público. Aunque el gobierno insistía que Chávez estaba dirigiendo el país desde su lecho de enfermo, la transición hacia la era posterior a Chávez había comenzado.

Maduro empezó a actuar como presidente, pasando por alto las normas constitucionales<sup>3</sup>. El Tribunal Supremo de Justicia, que en la práctica está controlado por el ejecutivo, manifestó que, en su calidad de presidente en ejercicio, Chávez no tenía que tomar juramento del cargo el 10 de enero y que esa ceremonia se podía celebrar

---

<sup>1</sup> “Divulgación Presidencial 2012”, Consejo Nacional Electoral (CNE), 9 de noviembre de 2012.

<sup>2</sup> Para un análisis de los antecedentes de las elecciones en Venezuela y la situación política, véanse Crisis Group, Informe sobre América Latina N° 42, *Elecciones en Venezuela: peligrosas incertidumbres*, 26 de junio de 2012, y N° 38, *Violencia y política en Venezuela*, 17 de agosto de 2011.

<sup>3</sup> Entrevista de Crisis Group, experto legal, Caracas, 30 de abril de 2013. Los sucesores de Chávez enfrentaban un dilema: el vicepresidente Maduro estaba obligado constitucionalmente a ocupar el cargo del presidente durante sus ausencias “temporales”, pero el argumento oficial era que Chávez sólo estaba de licencia médica, otorgada por la Asamblea Nacional, por lo cual no se necesitaba un reemplazo. Sin embargo, como presidente electo, una vez terminado su período de gobierno de 2007-2013, Chávez tendría que haber sido reemplazado por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el funcionario público elegido más próximo en jerarquía (la vicepresidencia es un cargo designado). Artículo 233, Constitución de 1999, enmendada y publicada en 2009.

cuando fuera conveniente<sup>4</sup>. Después de que se divulgó el deceso de Chávez el 5 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la celebración de unas nuevas elecciones para el 14 de abril. Con la semana santa de por medio, quedaban menos de diez días de campaña.

Desde la perspectiva de Chávez, el país se encontraba en una transición “irreversible” hacia la revolución socialista. Había ampliado el control del Estado sobre elementos estratégicos de la economía, expropiado millones de hectáreas de tierra agrícola e instaurado un rígido sistema de control de precios y de cambio. Paralelamente, había creado docenas de “misiones” sociales, programas de bienestar que cubrirían un sinnúmero de aspectos desde alfabetización y atención médica básica hasta vivienda, pensiones y derechos de los indígenas, que le valieron el apoyo ferviente de millones de personas, especialmente entre los pobres. Canalizando los ingresos provenientes de la empresa estatal de petróleo hacia fundaciones que él mismo manejaba a discreción, el presidente intercambiaba los beneficios del gobierno por votos<sup>5</sup>. Pero el costo para la economía fue una inflación de más del 20% anual, combinada con un crecimiento del producto interno bruto que amenazaba con volverse negativo. Aunque evitó ejercer la represión en gran escala, Chávez también menoscabó los derechos civiles y tildó a la oposición de antipatriótica y de estar inspirada en ideas foráneas<sup>6</sup>.

### B. *Una campaña asimétrica*

Las elecciones se llevaron a cabo en una atmósfera cargada de desconfianza mutua. El Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad en la materia, no obligó a la campaña del candidato del gobierno (Maduro) a respetar las normas en relación con favoritismos en los medios de comunicación estatales y el uso de recursos públicos para fines partidistas. La percepción de que el CNE no era imparcial se vio reforzada por los lazos cercanos entre cuatro de los cinco miembros de su junta directiva y el gobierno y por la postura gobiernista de su presidenta<sup>7</sup>.

La campaña se lanzó en un momento en que el país aún estaba asimilando el impacto de la muerte del presidente. Las emociones estaban a flor de piel entre los millones de seguidores de Chávez, muchos de los cuales lo percibían como un santo laico<sup>8</sup>. Maduro utilizó ampliamente la imagen y la voz de Chávez en su campaña, y enfatizó

---

<sup>4</sup> También se invocó la “continuidad administrativa” para argumentar que el gobierno en ejercicio –incluidos el vicepresidente y el gabinete– debía seguir desempeñando sus funciones. “Sala Constitucional considera que no es necesaria una nueva juramentación de Chávez”, *Globo Visión*, 9 de enero de 2013.

<sup>5</sup> “Chávez derrocha recursos del Estado en año electoral”, *El Nuevo Herald*, 30 de marzo de 2012.

<sup>6</sup> Desde 2004, Crisis Group ha informado sobre el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos y del Estado de Derecho en Venezuela, y sobre cómo esto ha aumentado las probabilidades de la confrontación civil y la violencia. Véase, por ejemplo, Boletín informativo de Crisis Group sobre América Latina N°5, *Venezuela: ¿Hacia una guerra civil?*, 10 de mayo de 2004; entrevista, experto en derechos humanos, Caracas, 3 de mayo de 2013. Existen casos particulares de restricción de los derechos civiles, como ponen de manifiesto las limitaciones impuestas a los medios de comunicación independientes, los procesos penales instaurados contra miembros de la oposición, las amenazas y la intimidación contra defensores y defensoras de derechos humanos y el retiro anunciado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Véase también “Venezuela: el legado autoritario de Chávez”, Human Rights Watch, 5 de marzo de 2013.

<sup>7</sup> “Tibisay Lucena rechaza injerencia estadounidense en proceso electoral”, *Ciudad Caracas*, 18 de marzo de 2013, “Tibisay Lucena se quitó la careta”, *El Universal*, 6 de abril de 2013.

<sup>8</sup> Véase James Anderson, “Hugo Chávez Mourned, Celebrated at ‘People’s Shrine’ In Caracas’ 23 de Enero Slum”, *The Huffington Post*, 3 de abril de 2013.

el hecho de que el presidente difunto lo había ungido a él como su sucesor. Las primeras encuestas sugerían que Maduro obtendría el mismo margen de victoria que sacó Chávez contra Capriles en las elecciones de octubre<sup>9</sup>.

El partido de gobierno enfrentó a la oposición unida en torno a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una alianza que se había conformado cinco años atrás<sup>10</sup>. Los votantes tenían que decidir entre la opción de profundizar los alcances de la revolución bajo un nuevo liderazgo que aún no había sido puesto a prueba y la opción de un cambio abrupto de rumbo hacia un modelo más pluralista, con la promesa de preservar los logros sociales del régimen<sup>11</sup>.

La campaña electoral fue profundamente asimétrica. El sistema de radio y televisión del gobierno, constituido por seis canales de televisión estatales y una extensa red de estaciones de radio, así como los medios de comunicación oficiales en formato impreso, dieron una amplia cobertura a Maduro, al tiempo que hacían caso omiso de la campaña de Capriles o denigraban al candidato<sup>12</sup>. Además de la habilidad del gobierno para hacer transmisiones simultáneas en todos los canales televisivos y cadenas radiales, la ley obligaba a los medios privados a transmitir diariamente diez minutos de propaganda oficial<sup>13</sup>. Las entidades gubernamentales y las empresas del Estado, como Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Corpoelec, la empresa de energía eléctrica, pusieron a su personal, sus vehículos y otros recursos a disposición de la campaña y llenaron sus edificios de propaganda. El presidente de PDVSA y ministro de Energía, Rafael Ramírez, fue el director de movilización de la campaña de Maduro<sup>14</sup>.

### C. *Un resultado más reñido de lo previsto*

Sin embargo, contrario a lo que casi todas las encuestas pronosticaban, las elecciones resultaron ser sumamente reñidas. El primer boletín del CNE, emitido a las 11.30 p.m. con más del 99% de las mesas escrutadas, daba a Maduro una ventaja de apenas 236.000 votos, menos del 1,6%. Los resultados se anunciaron como “irreversibles”, aunque surgieron serias inquietudes respecto de lo que la oposición consideró como una acción precipitada<sup>15</sup>.

Capriles había telefonado a Maduro antes del anuncio para proponerle una reunión de los jefes de campaña con el propósito de determinar la mejor forma de manejar

---

<sup>9</sup> Tamara Pearson, “Poll Shows Most Venezuelans Feel Revolution Isn’t Over without Chavez”, *Venezuela News, View and Analysis*, 24 de abril de 2013.

<sup>10</sup> Denominado originalmente Movimiento Quinta República (MVR), el partido dominante en el gobierno se convirtió en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 2007, en alianza con un grupo de partidos más pequeños, entre los cuales se cuenta el Partido Comunista de Venezuela (PCV), bajo las toldas del Gran Polo Patriótico (GPP). En términos ideológicos la MUD es variada, aunque los partidos más grandes que la integran son el centrista Primero Justicia (PJ) y el socialdemócrata Un Nuevo Tiempo (UNT).

<sup>11</sup> Entrevista de Crisis Group, analista político, Caracas, 4 de mayo de 2013.

<sup>12</sup> Entrevista de Crisis Group, analista de medios de comunicación, Caracas, 3 de mayo de 2013.

<sup>13</sup> Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos N°39.610 (2011), artículo 10. Según la página web [www.monitoreociudadano.org](http://www.monitoreociudadano.org), las cadenas transmitieron en total 9 horas, 42 minutos y 4 segundos durante la campaña.

<sup>14</sup> Para mayor información sobre el papel de PDVSA en las dos últimas elecciones presidenciales, véase “Maquinaria electoral busca los votos en favor de Maduro”, *El Comercio*, 9 de abril de 2013.

<sup>15</sup> La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció el 14 de abril de 2013 que Maduro había obtenido 7.505.338 votos (50,66%) y Capriles 7.270.403 (49,07%). Véase José Luis Méndez la Fuente, “El último empujón de Chávez”, *El Universal*, 16 de abril de 2013. El 25 de abril de 2013, el CNE dijo que la ventaja de Maduro había aumentado a 273.056 sufragios: 7.575.704 contra 7.302.648 de la oposición. Véase “Divulgación Presidencial 2013”, CNE, 25 de abril de 2013.

esta difícil situación política<sup>16</sup>, pero no se llegó a ningún acuerdo. La campaña de la MUD dijo tener indicios, incluidos datos de conteos rápidos, de que podría haber ganado. Tras el anuncio del CNE, Vicente Díaz, el único rector simpatizante de la oposición, siguió insistiendo en que se abriera el 100% de las urnas de votación y se compararan los “comprobantes” de papel con los resultados electrónicos<sup>17</sup>. Dijo que no estaba cuestionando la validez del conteo, pero que dado el margen estrecho del triunfo de Maduro era importante asegurar la total transparencia. Poco después Capriles hizo eco de esta propuesta y en un inicio Maduro la aceptó en su discurso de triunfo. Todo parecía indicar que una auditoría podría resolver rápidamente todas las dudas<sup>18</sup>.

### III. La crisis

---

#### A. La posición del gobierno

Al dirigirse a sus partidarios en el palacio presidencial poco después de que se anunció su victoria, Maduro respondió al llamado de Vicente Díaz para que se abrieran las urnas diciendo: “¡Hagámoslo! No tenemos miedo. ¡Que hablen las cajas! A lo mejor [mi mayoría] aumenta”<sup>19</sup>. Sin embargo, esta postura pareció menos clara a la mañana siguiente. El coordinador de la campaña de Maduro, Jorge Rodríguez, dijo en una entrevista por televisión: “Si se abre el 100% de las cajas es para hacer la auditoría, no el conteo manual”<sup>20</sup>. Tibisay Lucena, presidenta del CNE, fue aún más lejos esa tarde en la ceremonia en que se proclamó ganador a Maduro. Afirmando que el sistema electoral había “funcionado perfectamente”, descartó el conteo manual o la apertura de todas las urnas de votación, pese a que la junta del CNE no se había reunido para estudiar la petición de la oposición. Lucena dijo que las papeletas de voto “sólo cumplen la función de un recibo”, mientras que los votos “son datos registrados en la memoria de la máquina [electrónica]”<sup>21</sup>.

Luisa Estella Morales, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el árbitro último a nivel nacional, dijo enfáticamente que el sistema electoral era com-

---

<sup>16</sup> Véase, por ejemplo, “Nicolás Maduro apoya propuesta de la oposición de auditar resultados electorales”, *Miami Diario.com*, 15 de abril de 2013.

<sup>17</sup> El sistema electoral de Venezuela es ahora completamente automatizado. Cada máquina de votación, además de almacenar electrónicamente cada voto individual, produce una papeleta o comprobante que confirma la opción seleccionada por el votante y la deposita en una caja que corresponde a esa máquina. Según el reglamento del CNE, más de la mitad de estas urnas son sometidas a una auditoría “caliente” después del cierre de los comicios, en el curso de la cual las papeletas se comparan con la lista impresa de votos para cada candidato de la máquina. De conformidad con el reglamento del CNE, el 14 de abril se debería haber auditado de esta forma el 52,98% de las urnas, aunque existen indicios de que el número real fue menor. Vicente Díaz pidió que se auditaran las urnas que aún faltaban. Véase “Manual de Funcionamiento de la Mesa Electoral”, CNE, sin fecha.

<sup>18</sup> En su discurso del 14 de abril, Maduro dijo que aceptaba una auditoría. “Nicolás Maduro: ‘Hugo Chávez sigue bendiciendo a su pueblo’”, *El País Internacional*, 15 de abril de 2013.

<sup>19</sup> “Maduro está dispuesto a efectuar auditoría del 100% de los votos emitidos el 14-A”, *Radio Nacional de Venezuela*, 15 de abril de 2013.

<sup>20</sup> “Jorge Rodríguez indica que abrir 100% de cajas no implica recuento manual”, *El Universal*, 15 de abril de 2013.

<sup>21</sup> Véase el discurso de Lucena en “Este es el discurso completo de Tibisay Lucena durante la proclamación de Maduro”, *Noticias 24*, 15 de abril de 2013.

pletamente automático y que el conteo manual no existía. Quienes “piden lo imposible”, afirmó, estaban provocando “una batalla incesante en las calles”<sup>22</sup>.

No obstante, el 18 de abril en las horas de la noche, mientras Maduro se encontraba en Lima reunido con los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), a quienes les preocupaba cada vez más el aparente clima de creciente inestabilidad, el CNE dio marcha atrás y anunció que se abriría para recuento, en presencia de representantes de la MUD, una muestra de un máximo de 12.000 urnas de votación entre las aproximadamente 18.000 a las que antes no se les había hecho auditoría<sup>23</sup>.

### B. *La posición de la MUD*

En respuesta al primer boletín del CNE, Capriles, acompañado por los miembros de su equipo de campaña, efectuó una declaración por televisión en la que hizo eco a la propuesta de Díaz de que se auditara el 100% de los comprobantes de voto. “No vamos a reconocer los resultados sino cuando se cuenten todos los votos, uno por uno”, dijo. “Nuestras cifras son diferentes de las que se anunciaron”. El coordinador de su campaña, Ramón Guillermo Avelado, mencionó conteos rápidos, encuestas a boca de urna, actas recogidas por testigos de la oposición y los diferentes métodos de predicción que utilizan las instituciones privadas y los partidos como algunos de los elementos de los que se había valido la MUD para concluir que el triunfador había sido Capriles<sup>24</sup>.

Dos días después, en una rueda de prensa, el propio candidato dio más detalles. La mayor parte de las pruebas a las que aludió se referían a supuestas irregularidades cometidas en los puestos de votación, como violencia y coerción, antes que a inconsistencias numéricas. Según Capriles, la violencia había afectado a 860 centros de votación, en donde más de 2,7 millones de personas se habían registrado para votar; en más de 1.000 centros de votación, en los que había aproximadamente el mismo número de votantes registrados, hubo casos de votación “asistida”<sup>25</sup>; en 286 centros, con más de 720.000 votantes, se excluyó a la fuerza a los testigos de la oposición; y 189.000 votantes se vieron afectados por daños en las máquinas electorales<sup>26</sup>. Sin embargo, citó tan solo un puesto de votación, en el estado de Trujillo, en donde, según dijo, se habían contado más votos que el número de votantes, aunque su afirmación pareció haber estado basada en un malentendido<sup>27</sup>. Capriles dijo que la MUD también consideraba sospechoso que Maduro hubiera obtenido el 100% de los votos en 39 mesas de votación (cada una con una máquina electoral) y que hubie-

---

<sup>22</sup> “Venezuelan Supreme Court bars any chance of a manual recount of votes”, *MercoPress*, 17 de abril de 2013; artículo 297, Constitución.

<sup>23</sup> “Que sea Venezuela la gran vencedora”, *El Nuevo Día*, 20 de abril de 2013.

<sup>24</sup> “Venezuela on edge as vote count continues”, *Al Jazeera*, 15 de abril de 2013.

<sup>25</sup> El personal electoral está facultado para asistir a votantes con discapacidades en los puestos de votación. Capriles hizo referencia a abusos cometidos con arreglo a este procedimiento, diciendo que el personal electoral acompañó a votantes sin discapacidad, alentándolos a votar por el candidato oficial.

<sup>26</sup> El resumen de Capriles de las irregularidades que denunciaba la MUD figuran en esta serie de diapositivas: “En fotos: Los datos que presentó Capriles sobre presuntas irregularidades del 14-A”, *Noticias24*, 16 de abril de 2013.

<sup>27</sup> Capriles parece haber estado comparando la totalidad de los votos emitidos con el número de votantes correspondientes a sólo una de las dos máquinas en la estación de votación. “Elecciones Venezuela: La oposición presenta escandalosas cifras de las presuntas irregularidades del 14-A”, *lainformación.com*, 22 de abril de 2013.

ra sacado más votos de los que obtuvo Chávez en octubre de 2012, con casi 1.200, y en algunos casos varias veces más<sup>28</sup>.

Con el fin de determinar los efectos de estas supuestas irregularidades en el resultado, la MUD exigió que la auditoría abarcara todo el material pertinente, incluido el sistema de autenticación integrado (el SAI), así como acceso pleno al cuaderno de votación manual correspondiente a cada máquina de votación<sup>29</sup>. Cuando el CNE rechazó la petición, la MUD dijo que no participaría en la auditoría. Más bien, impugnaría el resultado en los tribunales y además presentaría su denuncia ante organizaciones internacionales<sup>30</sup>.

A comienzos de mayo, la MUD presentó dos denuncias formales ante la sala electoral del TSJ. En la primera pedía la anulación total de las elecciones en razón de las irregularidades generalizadas documentadas. En la segunda, se mencionaban concretamente 5.729 mesas de votación en las que consideraba que las irregularidades cometidas requerían una nueva votación. La MUD afirmó que más de 2,3 millones de votos se habían visto comprometidos.

### C. *Violencia en las calles*

Al día siguiente de las elecciones, manifestantes de la oposición salieron a las calles en varias ciudades para exigir un recuento de votos. En Caracas bloquearon una avenida principal y una calle y prendieron fuego a pilas de basura. El gobierno desplegó tropas antimotines de la guardia nacional en vehículos blindados desde donde se dispararon gases lacrimógenos, pero luego los retiró. Capriles pidió a sus partidarios que se abstuvieran de cometer actos de violencia y anunció una “ruta” a seguir: cacerolazos todas las noches a las 8 p.m. y una marcha de protesta hasta la sede del CNE en Caracas el 17 de abril, precedida por manifestaciones el día anterior afuera de las oficinas regionales del CNE en todo el país.

El gobierno insistió en que la MUD quería propiciar situaciones de violencia con el fin de justificar un golpe de Estado y una intervención extranjera. Recordando el mes de abril de 2002, cuando una marcha de la oposición hasta el palacio presidencial para pedir la renuncia de Chávez terminó con una serie de muertes y un golpe de estado de corta duración, Maduro anunció que la marcha hasta el CNE quedaba prohibida, tras lo cual Capriles la suspendió para evitar la violencia. El gobierno aseguró que decenas de centros de diagnóstico integral gubernamentales (CDI) habían sido objeto de actos de vandalismo en todo el país y que se había atacado al personal médico<sup>31</sup>. El grupo de derechos humanos Provea concluyó que ninguno de esos incidentes era verosímil<sup>32</sup>. Según fuentes del gobierno, ocho partidarios de Maduro murieron en enfrentamientos con la oposición. (La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, dijo que la

---

<sup>28</sup> Véase, por ejemplo, “Maduro no sacó los votos que el CNE anunció, por eso queremos una auditoría: CaprilesRandoski (+video)”, *Noticias 24*, 25 de abril de 2013.

<sup>29</sup> Los votantes se tienen que identificar presentando su documento de identidad y escaneando sus huellas digitales. La prueba dactilar debe indicar cuántas personas votaron más de una vez y en qué localidades, aunque tardaría algún tiempo obtener esa información. El acceso a los cuadernos, siempre y cuando hayan sido llenados correctamente por el personal electoral, podría revelar, por ejemplo, si una persona firmó o puso su huella dactilar en nombre de varios votantes “fantasma”.

<sup>30</sup> “Equipo de Capriles rechaza supervisar la auditoría de las presidenciales por los métodos empleados por CNE”, *Europa Press*, 30 de abril de 2013.

<sup>31</sup> Vivian Sequera y Michael Weissenstein, “Venezuela wrestles over truth of bombing claims”, *Associated Press*, 24 de abril de 2013.

<sup>32</sup> “Provea corrobora falsedad en la denuncia de CDIs quemados en el país”, *Provea*, 18 de abril de 2013.



cifra era nueve). Altos funcionarios del gobierno responsabilizaron a Capriles y a otros dirigentes de la MUD y la fiscal general amenazó con procesarlos judicialmente<sup>33</sup>.

El gobierno no pudo corroborar las denuncias. Varios informes de prensa arrojaron dudas sobre su autenticidad<sup>34</sup>. Algunas de las víctimas al parecer murieron en incidentes que no tenían nada que ver con las protestas por las elecciones, o eran partidarios de la oposición en lugar de simpatizantes del gobierno. La organización de derechos humanos Foro Penal Venezolano indicó que casi 200 personas, incluidos menores de edad, habían sido detenidas por la guardia nacional y habían sido sometidas a abusos físicos y mentales<sup>35</sup>.

## IV. El camino por delante

---

### A. Fragilidad institucional

La falta de instituciones independientes y fuertes en Venezuela constituye un obstáculo importante para la resolución de la crisis<sup>36</sup>. Chávez heredó unas instituciones debilitadas por la corrupción y la interferencia política, pero sus 14 años en el poder exacerbaron el problema<sup>37</sup>. Su reforma constitucional de 1999 aumentó el número de poderes públicos nominalmente autónomos de los tres tradicionales a cinco<sup>38</sup>, pero con el paso del tiempo los fue purgando de figuras independientes que reemplazó con sus partidarios<sup>39</sup>. Le sirvió de ayuda la decisión de la oposición de boicotear las elecciones legislativas de 2005, con lo que el gobierno quedó en libertad de nombrar a sus aliados en cargos clave.

La presidenta del TSJ (y jefa del poder judicial), Luisa Estella Morales, había dicho anteriormente que la separación de poderes “debilita al Estado”<sup>40</sup>. En la práctica el principio se ha menoscabado seriamente, pese a un compromiso formal de respetar y promover la democracia interamericana y las normas del Estado de Derecho<sup>41</sup>.

---

<sup>33</sup> Véanse, por ejemplo, Milagros L. de Guereño, “El Gobierno venezolano llama ‘asesino’ a Capriles”, *La Voz Digital*, 25 de abril de 2013; y “Fiscal Luisa Ortega: Hechos violentos han dejado 9 personas fallecidas y 78 lesionadas”, *Agencia Venezolana de Noticias*, 25 de abril de 2013.

<sup>34</sup> Silverio González Téllez, “La Limonera: Cuando los hechos no importan”, *Analítica.com*, 1 de mayo de 2013.

<sup>35</sup> Véase, por ejemplo, Ocarina Espinoza, “Foro Penal denuncia agresiones ‘graves’ a detenidos por razones políticas”, *El Universal*, 22 de abril de 2013.

<sup>36</sup> Entrevista de Crisis Group, analista político, Caracas, 4 de mayo de 2013.

<sup>37</sup> “A Decade Under Chávez”, Human Rights Watch, septiembre de 2008; “Report on the State of the Independence of the Judiciary in Venezuela”, Human Rights Foundation, septiembre de 2012.

<sup>38</sup> A los poderes tradicionales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, la Constitución de 1999 añadió un poder electoral (el CNE) y un poder ciudadano (la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República). Véase la sección V, capítulos IV y V de la Constitución.

<sup>39</sup> “A Decade Under Chávez”, *op. cit.*

<sup>40</sup> “La división de poderes debilita al estado”, *El Universal*, 5 de diciembre de 2009.

<sup>41</sup> El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana dice que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Venezuela firmó la Carta, junto con otros miembros de la OEA, en Lima el 11 de septiembre de 2001.

La mayor parte de los jueces carecen de título permanente. Según la jueza Morales, en 2010 por lo menos 1.379 de los 1.914 jueces no lo tenían<sup>42</sup>. Pero incluso los que sí tienen cargo permanente pueden ser destituidos a discreción del presidente, lo cual aumenta la presión a la que se ven sometidos los jueces en los casos más sensibles<sup>43</sup>. En 2009, la jueza María Lourdes Afiuni, que puso en libertad a un hombre que muchos consideraban un prisionero político, fue arrestada tras ser calificada de “bandida” por Chávez, quien además dijo que le deberían dar 30 años de cárcel<sup>44</sup>. Sigue bajo arresto domiciliario, aunque todavía sin imputación formal de cargos de corrupción<sup>45</sup>. El ex presidente de la sala penal del TSJ, Eladio Aponte, que huyó de Venezuela en 2012 tras ser acusado de tener vínculos con el narcotráfico, describió un sistema jurídico dirigido desde la vicepresidencia, en el que los jueces y fiscales recibían órdenes del gobierno<sup>46</sup>.

Varios cargos directivos en los poderes del Estado, nominalmente autónomos, son ejercidos por suplentes o por funcionarios cuyos períodos han expirado. Siete miembros del TSJ, cuyos períodos de doce años terminaron el 27 de diciembre pasado, no han sido reemplazados. Sus puestos los ocupan suplentes. El Contralor General de la República, Clodosbaldo Russian, falleció en junio de 2011, pero el gobierno le dejó el cargo a su adjunta, Adelina González. Tres de los cinco rectores del CNE, incluida su presidenta, Tibisay Lucena, deberían haber sido reemplazados en abril, pero el proceso de búsqueda de sus sucesores, que por lo general tarda meses, aún no ha empezado. La razón en todos estos casos parece ser la misma: para imponer a candidatos de su elección, el gobierno requiere una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional (110 de los 165 escaños). Como solo tiene 98, es fundamental lograr un consenso con la oposición.

## B. *El papel de las fuerzas armadas*

Chávez, que era oficial del ejército, describía su régimen como “cívico-militar”<sup>47</sup>. Concedió a las fuerzas armadas el derecho de votar, que hasta entonces no tenían, dándoles participación en el “desarrollo nacional” en la Constitución de 1999<sup>48</sup>. Luego hubo una serie de reformas y nuevas leyes que dieron al presidente un control más directo sobre los militares (por ejemplo, ampliando su control sobre todos los ascensos al rango de oficial) y a éstos un mayor control sobre los ciudadanos. A mediados de 2008, al menos 40 miembros o ex miembros de las fuerzas armadas ocupaban al parecer cargos directivos en organismos civiles clave<sup>49</sup>. En la actualidad, los militares desempeñan un papel importante en la prevención de delitos y crímenes y en las “zonas de seguridad”, donde se han suspendido ciertos derechos civiles, y se ocupan

---

<sup>42</sup> Véase “La desconfianza en la justicia: el caso Afiuni y la independencia de la judicatura”, Instituto de Derechos Humanos de la International Bar Association, abril de 2011.

<sup>43</sup> “Report on the State of the Independence of the Judiciary in Venezuela”, Human Rights Foundation, septiembre de 2012.

<sup>44</sup> Alicia de la Rosa, “ONU reiteró exigencia a Venezuela de libertad para la jueza Afiuni”, *El Universal*, 5 de abril de 2013. “Venezuela’s Chávez criticized over hasty arrest of Judge”, *The Wall Street Journal*, 17 de diciembre de 2009.

<sup>45</sup> Francisco Olivares, “Afiuni, la presa del Comandante”, *La Hoja del Norte*, Caracas, editorial, 2012.

<sup>46</sup> “Historias secretas de un juez de Venezuela”, *Soitu*, [www.youtube.com/watch?v=uYIbEEGZZ6s](http://www.youtube.com/watch?v=uYIbEEGZZ6s).

<sup>47</sup> “Chávez: solo la unión cívico-militar garantizará la victoria de la revolución bolivariana”, *Agencia Venezolana de Noticias*, 4 de agosto de 2011.

<sup>48</sup> Artículos 330 y 328, Constitución de 1999.

<sup>49</sup> “Lista completa de militares que ocupan puestos en el gobierno del Presidente Chávez”, Reporte Confidencial, 17 julio de 2008.

de la vigilancia de todos los edificios públicos que se consideran sensibles. Incluso la industria eléctrica está militarizada, supuestamente para prevenir actos de sabotaje.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tiene cinco componentes, uno de los cuales –la milicia– no figura en la Constitución. Los miembros de la milicia juran lealtad a la revolución, no al Estado<sup>50</sup>. Los otros componentes también han sido obligados a adoptar consignas revolucionarias, incumpliendo su obligación constitucional de servir a toda la nación<sup>51</sup>. Después de la muerte de Chávez, su recién nombrado ministro de Defensa, el almirante Diego Molero, dijo que la “misión de la fuerza armada” era poner a Nicolás Maduro en la presidencia y “darle en la madre a toda esa gente fascista”<sup>52</sup>.

Los sucesores de Chávez han activado el “comando cívico-militar”, un cuerpo que el comandante creó pero al que pocas veces se refirió<sup>53</sup>. Esta institución, que no tiene estatuto constitucional, es ostensiblemente una forma de liderazgo colectivo que desdibuja la distinción entre partido, gobierno y Estado<sup>54</sup>. Hizo su primera aparición pública el día en que se anunció el deceso de Chávez<sup>55</sup> y parece estar integrado por oficiales superiores de las fuerzas armadas, el poder ejecutivo (incluido todo o la mayor parte del gabinete) y los gobernadores estatales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la mitad de los cuales son ex oficiales militares. Sin embargo, no se conoce su función y su estructura exactas y no tiene un presupuesto que sea público.

Algunos analistas militares afirman que las fuerzas armadas son mucho más representativas de la sociedad de lo que este contexto sugiere, pese a que en los rangos superiores predominan oficiales leales a la ideología bolivariana<sup>56</sup>. Poco antes de las elecciones, el almirante Molero dijo que en las fuerzas armadas había grupos empeñados en intervenir a favor de la oposición<sup>57</sup>. Al menos una docena de oficiales y un número similar de militares de menor rango fueron arrestados el día de los comicios, en circunstancias que siguen siendo poco claras<sup>58</sup>.

### C. *La amenaza de la violencia política*

A pesar de los años de gran polarización política y de tener Venezuela una de las tasas de homicidio más altas del mundo, la violencia política ha sido relativamente escasa<sup>59</sup>. El número de presos políticos es bajo, e incluso en un ambiente de amenazas

---

<sup>50</sup> El alto mando y la milicia de 125.000 efectivos juran lealtad pública a la “revolución”, en desafío a la Constitución. Phil Gunson, “Venezuela’s New Era”, *Foreign Policy* (en línea), 19 de febrero de 2013.

<sup>51</sup> El artículo 328 de la Constitución dice que la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación.

<sup>52</sup> “Ministro Molero llamó a votar por Maduro ‘para dar en la madre a fascistas’”, *El Universal*, 6 de marzo de 2013.

<sup>53</sup> “Presidente Chávez anuncia creación de comando cívico-militar antigolpe”, PSUV, [www.psuv.org.ve](http://www.psuv.org.ve), 13 de abril de 2012.

<sup>54</sup> Entrevista de Crisis Group, analista político, Caracas, 4 de mayo de 2013.

<sup>55</sup> Hernán Lugo-Galicia, “Maduro sustenta gobierno en estructura colectiva de mando”, *El Nacional*, 29 de abril de 2013.

<sup>56</sup> Entrevista de Crisis Group, analista militar, Caracas, 6 de mayo de 2013.

<sup>57</sup> “Molero: ‘Sí existen elementos, grupos, que quieren actuar en el interior de la Fuerza Armada’”, *Globovisión*, 3 de abril de 2013.

<sup>58</sup> Javier Ignacio Mayorca, “Evalúan pase a retiro de militares retenidos el domingo”, *El Nacional*, 17 de abril de 2013.

<sup>59</sup> Para un examen más detallado de este tema, véase Informe de Crisis Group, *Violencia y política en Venezuela*, *op. cit.*

constantes, en términos generales la oposición ha podido organizarse con libertad. En gran medida, esto refleja el control personal ejercido por Chávez mediante su carisma, su autoridad y su habilidad política<sup>60</sup>. Incluso en los años de mayor tensión (2001-2004), cuando la oposición ejercía todavía una influencia considerable sobre las fuerzas armadas, las rebeliones en sus filas se resolvían casi siempre de manera pacífica<sup>61</sup>. Por consiguiente, la súbita salida de escena del que quizá era el único hombre capaz de mantener unido al régimen sin imponer una dictadura abierta constituye un importante factor de desestabilización<sup>62</sup>.

Los orígenes del movimiento político que llegó al poder con Chávez se remontan a una alianza militar forjada con guerrilleros de izquierda del Partido de la Revolución Venezolana (PRV), al que pertenecía el hermano de Chávez, Adán<sup>63</sup>. Sus líderes nunca han renunciado al uso de la violencia como último recurso<sup>64</sup>. Mantiene grupos de civiles armados que desempeñan una función básica de intimidación y aparecen únicamente en momentos de tensión, entre los que se cuentan las elecciones<sup>65</sup>.

Los comicios del 14 de abril produjeron un cambio importante en el equilibrio de las fuerzas políticas. Por primera vez en muchos años, el gobierno ha sido puesto a la defensiva por una oposición envalentonada que tiene razones para esperar que pronto será una mayoría en el país, si es que no lo es ahora<sup>66</sup>. Además, el régimen dista mucho de ser monolítico. Más bien es una alianza entre facciones civiles y militares que cobija a una gama de posiciones ideológicas que van desde la izquierda radical pro cubana hasta los pragmáticos que se inclinan más hacia el ámbito empresarial. Algunos gobernadores estatales tienen sus propias agendas políticas. Chávez pudo mantener a esta coalición unida gracias a su personalidad. Maduro, que pertenece a la izquierda civil radical y depende de un liderazgo colectivo, podría ver menoscabada su posición por rivales, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, un ex oficial del ejército de quien se dice que tiene importantes intereses en el ámbito empresarial.

Los sucesos de 2002, cuando un golpe de Estado depuso por breve tiempo a Chávez, dejaron a sus partidarios convencidos de que sus opositores eran fundamentalmente antidemocráticos. Esto se ha convertido en parte integral del discurso político del gobierno, que afirma que la oposición tiene intenciones conspiradoras y cuenta

---

<sup>60</sup> Entrevista de Crisis Group, analista político, Caracas, 4 de mayo de 2013.

<sup>61</sup> La fuerza armada depuso y luego reintegró al presidente Chávez en el transcurso de tres días en abril de 2002, sin disparar un solo tiro, aunque varios civiles murieron, algunos de ellos a manos de soldados leales al presidente. En octubre de ese año, varios oficiales disidentes, dirigidos por generales y almirantes, protagonizaron una toma de la Plaza Francia en Altamira (al oriente de Caracas) que duró varios meses. Su protesta fue pacífica y el gobierno no intentó retomar la plaza por la fuerza. Un civil armado mató a varias personas en la plaza y dos soldados que participaron en la protesta fueron asesinados, junto con un civil, pero en ninguno de estos casos se pudo establecer un vínculo sólido con el gobierno o con la oposición.

<sup>62</sup> El 23 de marzo de 2013, Cabello dijo: “En la revolución, Chávez es el cuerdo que nos ha enseñado. Era el muro de contención de muchas ideas locas que se nos ocurrían a nosotros... El Presidente Chávez imponía su liderazgo, su prudencia y su conciencia”. “Cabello: Chávez era el muro de contención de muchas ideas locas de nosotros”, *El Universal*, 23 de marzo de 2013.

<sup>63</sup> Alberto Garrido, *Guerrilla y conspiración militar en Venezuela* (Caracas, 1999).

<sup>64</sup> “Adán Chávez llama al PSUV a no olvidar la lucha armada”, *El Universal*, 27 de junio de 2011.

<sup>65</sup> Para una descripción detallada de los vínculos del gobierno con grupos civiles armados, véase Informe de Crisis Group, *Violencia y política en Venezuela*, *op. cit.*, págs. 17-19. El 15 de abril, el ex ministro de Información –y jefe de propaganda de la campaña de Maduro–, Andrés Izarra, instó, por conducto de Twitter, a que se utilizaran turbas chavistas en motocicletas para intimidar a la oposición; <https://twitter.com/IzarraDeVerdad/status/323997664456876033>.

<sup>66</sup> Entrevista de Crisis Group, analista político, Caracas, 4 de mayo de 2013.

con el respaldo de una superpotencia militar (los Estados Unidos)<sup>67</sup>, que el aparente compromiso de la MUD con la vía electoral es tan sólo una fachada y que el objetivo real de su dirigencia es derrocar la revolución por la fuerza.

Este discurso no tiene en cuenta la evolución de la oposición desde 2002, en particular la renuncia de su ala dominante, más moderada, al uso de métodos extraconstitucionales para lograr un cambio de régimen<sup>68</sup>. La desintegración del viejo sistema bipartidista antes del triunfo electoral de Chávez en 1998 había dejado a la fuerzas anti chavistas en manos de una variedad de actores sin partido, como los sindicatos, la asociación gremial Fedecámaras, los medios de comunicación y elementos del estamento militar. Solo después de fracasar en su intento de deponer al presidente mediante manifestaciones masivas, un intento golpista protagonizado por elementos extremistas, una huelga impulsada por la empresa privada y la parálisis de la industria petrolera, un referéndum revocatorio y un boicot electoral, la oposición finalmente se embarcó en la ardua tarea de reconstruir su liderazgo político y enfrentarse a Chávez en las urnas.

Sin embargo, el vaticinio de violencia del gobierno corre el riesgo de convertirse en realidad si se cierran deliberadamente los espacios políticos. La decisión de la dirigencia de la MUD de confrontar al gobierno disputando los resultados electorales ha unido a la oposición, al menos temporalmente. No obstante, sigue existiendo una pequeña minoría que siempre se ha opuesto a la idea de competir con el régimen en sus propios términos y podría verse fortalecida si se llegaran a cerrar los espacios democráticos que aún quedan<sup>69</sup>.

La tendencia desde las elecciones ha sido negativa. El rechazo inicial del gobierno a abrir todas las urnas de votación propició varios días de tensión y violencia esporádica. La decisión de Maduro de prohibir la marcha de protesta hasta el CNE en el centro de Caracas fue una restricción inconstitucional de las libertades civiles. Luego vino su exigencia –en relación con la decisión de la oposición de organizar una rueda de prensa en la que Capriles pidió a sus partidarios que participaran en la marcha– de que los canales de televisión, como Televen y Venevisión, además de otros medios de comunicación independientes, se definieran si estaban con “el pueblo o el fascismo”<sup>70</sup>.

En los días posteriores a los comicios, en todo el país y en todos los niveles de la administración pública hubo mención –a veces con vídeos o grabaciones de audio– de una política sistemática de destituir o degradar a funcionarios que se creía habían votado por Capriles<sup>71</sup>. El gobierno respondió a las denuncias de la oposición de que se habían robado las elecciones con una ofensiva en las calles, deteniendo a una gran cantidad de jóvenes manifestantes y, según grupos de derechos humanos, maltra-

---

<sup>67</sup> Véase, por ejemplo, “Maduro denunció planes de magnicidio y golpismo”, *Diario InfoRegión*, 3 de mayo de 2013.

<sup>68</sup> Entrevista de Crisis Group, analista político, Caracas, 4 de mayo de 2013.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> “Maduro a Venevisión y Televen: ‘Definanse con quién están’”, *Noticias 24 Carabobo*, 16 de abril de 2013. El único canal de televisión abiertamente asociado con la oposición, Globovisión, fue vendido hace poco a un empresario cercano al gobierno. “La Globovisión de Guillermo Zuloaga se acaba con su venta”, *El Universal*, 6 de mayo de 2013.

<sup>71</sup> Entrevista de Crisis Group, Caracas, 29 de abril de 2013; “Provea y la discriminación laboral por razones políticas”, *Provea*, 26 de abril de 2013.

tándolos<sup>72</sup>. También acusó a Capriles y a otros líderes de la MUD de estar fraguando un plan violento para desestabilizar el país en alianza con una potencia extranjera<sup>73</sup>.

Los sucesos en la Asamblea Nacional siguieron un patrón similar. Su presidente, Diosdado Cabello, no quiso permitir a los diputados de la oposición que se dirigieran a la Asamblea si antes no reconocían el triunfo de Maduro. Luego informó a los diputados de la oposición que presidían comisiones que habían sido destituidos de sus cargos<sup>74</sup>. Durante un acalorado intercambio de opiniones en la Asamblea, William Dávila, del partido opositor Acción Democrática (AD), sufrió una herida grave en la cabeza cuando lo golpeó un micrófono arrojado desde las filas del gobierno<sup>75</sup>. Dos semanas después, media docena de miembros de la oposición fueron físicamente agredidos en el recinto de la Asamblea por diputados cercanos al gobierno. Julio Borges recibió heridas en la cara; María Corina Machado tuvo que someterse a una operación de tres horas como consecuencia de una fractura de nariz. El gobierno culpó a la oposición de “provocación”<sup>76</sup>.

No obstante, existen algunos indicios de que podría predominar una línea más pragmática e incluyente y que podría haber diálogo. El 7 de mayo, diputados del gobierno y de la oposición aprobaron un “pacto de caballeros” sobre la importancia de evitar actos de violencia en el recinto de la Asamblea, lo que constituyó un primer paso para una posible normalización de las actividades parlamentarias. En el frente económico, donde se necesita adoptar con urgencia medidas impopulares, el reemplazo del ministro de Finanzas de línea ortodoxa, Jorge Giordani, por el más flexible Nelson Merentes, y la inesperada aproximación al sector privado por parte del nuevo ministro de Agricultura, Yván Gil, dan pie a cierto optimismo<sup>77</sup>. El nombramiento de un moderado, Calixto Ortega, como encargado de negocios en la embajada de Washington y el llamado al diálogo con la oposición que hizo el influyente ex vicepresidente José Vicente Rangel también son señales positivas. Si se puede mitigar la pasión inmediata de las dos partes en torno a los resultados de las elecciones, habrá oportunidades para que los moderados de lado y lado establezcan ese diálogo y empiecen el proceso de sanación.

---

<sup>72</sup> Ocarina Espinoza “Foro Penal denuncia agresiones graves a detenidos por razones políticas”, *El Universal*, 22 de abril de 2013.

<sup>73</sup> Alicia de la Rosa, “Maduro: en Venezuela lo que hay es una conspiración”, *El Universal*, 19 de abril de 2013. El 25 de abril, el ministro del Interior, general Miguel Rodríguez Torres, anunció el arresto de Timothy Tracy, un documentalista de los Estados Unidos, aduciendo que era un espía empeñado en fomentar disturbios en Venezuela como parte de un plan de desestabilización.

<sup>74</sup> “Diosdado Cabello destituyó a diputados que no reconocen como Presidente a Maduro”, *Caracol Noticias*, 17 de abril de 2013.

<sup>75</sup> “William Dávila y Julio Borges fueron agredidos en la AN: sin mediar palabras nos golpearon”, *Noticias 24*, 16 de abril de 2013.

<sup>76</sup> “La violencia irrumpe en la Asamblea Nacional de Venezuela”, *El País Internacional*, 1 de mayo de 2013.

<sup>77</sup> Poco después de su nombramiento, Gil asistió a la reunión anual de Fedeaagro, la principal organización agrícola del sector privado, la primera vez que un ministro hace esto desde que Chávez asumió el poder. Ha dicho que quiere trabajar con los productores privados; los dirigentes de Fedeaagro han acogido el hecho con agrado.

## V. Conclusiones

---

La naturaleza del régimen instaurado por Hugo Chávez durante los catorce años que se mantuvo en el poder deja a Venezuela con un cúmulo de serias y delicadas tareas que deben enfrentarse luego de su intempestiva salida de escena. Ninguno de sus seguidores, incluido su sucesor designado Nicolás Maduro, que hace poco asumió la presidencia, tiene la autoridad para gobernar a Venezuela como lo hizo Chávez. Pero las instituciones gubernamentales que deberían garantizar una transición sin mayores tropiezos fueron socavadas a tal punto bajo Chávez que ahora parecen incapaces de actuar autónomamente para cumplir sus funciones constitucionales. La apretada y controvertida victoria electoral de Maduro lo ha dejado debilitado, no solo en el país sino dentro del mismo movimiento chavista, justo en el momento en el que se requiere de un gran liderazgo para mantener la unidad del movimiento y hacer frente a cuestiones económicas, políticas y sociales apremiantes.

Con un país dividido políticamente en dos partes casi iguales, es imposible hacer política con la exclusión permanente de la otra parte. Chávez se abstuvo de ejercer una represión en gran escala y fue cauto en mantener espacios democráticos –en los medios de comunicación, en el parlamento y en las calles– donde la oposición pudiera expresar su desacuerdo. Si el gobierno de Maduro intenta cerrar estos espacios y obstaculizar una plena y transparente auditoría de los resultados electorales, muchos percibirán su mandato cada vez más como una imposición, con resultados imprevisibles que podrían tener consecuencias violentas incluso al interior del gobierno, debido a contradicciones internas muy difíciles de superar.

Hay indicios aislados de que el gobierno está abierto a un acercamiento más flexible en ciertos ámbitos. Sin embargo, cualquier apertura debe estar acompañada de medidas concretas que restauren la confianza en las instituciones del país. Si el gobierno deja en claro que sus políticas tienen en cuenta a todos los venezolanos y no solo a sus partidarios, podría avanzar considerablemente en el camino hacia la restauración de la paz social que el país necesita para convivir luego del fin de la era Chávez.

La mayor parte de la comunidad internacional ha sido indiferente o al menos ha guardado silencio en la evaluación del deterioro de los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela. Debido al interés por proteger cuestiones económicas y tal vez por un respeto excesivo por los asuntos internos, la profunda polarización que vive actualmente Venezuela y que representa un claro peligro de violencia política y mayor inestabilidad sólo ha producido reacciones episódicas y moderadas. Es el momento de enviar mensajes contundentes, especialmente de socios y vecinos, como Brasil. Las organizaciones internacionales, como UNASUR y la OEA, deben dar señales claras de preocupación por la inestabilidad regional. Esto debe incluir un llamado a todas las partes para que resuelvan pacíficamente los problemas políticos, respetando y promoviendo la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.

**Caracas/Bogotá/Bruselas, 16 de mayo de 2013**